

# Cooperativa Especializada en Gestión Judicial

## Recuperación de Cartera Boper



Doctora

**NANCY ESPERANZA RINCÓN ALDANA**

Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Atención y Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias – PQRS.

Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria

Radicado 20243700509981 de fecha 2024-11-25 18:55:57

E. S. D.

**JONATHAN SALVADOR PEREZ FLOREZ**, identificado con la cédula de Ciudadanía No. 1090374499 de Cúcuta, actuando en mi condición de representante de la Junta de Vigilancia de COESGERECABOPER, me permito contestar al Despacho la petición enviada, en los siguientes términos:

1. "Se verifique con exactitud el proceder de esta cooperativa con las irregularidades que está manifestando, poniendo en riesgo la administración de la justicia; además violando la norma establecida para tal fin, como está establecido en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 100 del artículo 134 numeral 5, inembargabilidad de las pensiones, excepto por concepto de alimentación o créditos a favor de cooperativas; la Ley 079 de 1998, en su artículo 7, que es evidente que para que exista un descuento por parte de la cooperativa en contra de un pensionado, debe hacerse un acto cooperativo (socio asociado o viceversa); y no a través de un acto mercantil como lo pretenden hacer valer, referenciado en el artículo 10 de la ley 079 de 1998, donde se faculta para terceras personas, en concordancia con la sentencia 589 de 1995, el cual le da vida a este artículo y autoriza a las cooperativas para realizar actos mercantiles con terceras personas, violando también todas sentencias mencionadas en el presente escrito.

Como el quejoso bien lo menciono el artículo 10 de la ley 79 de 1998 en concordancia con la sentencia 589 de 1995, autoriza a las cooperativas para realizar actos mercantiles con terceras personas, como ocurre en el caso que nos ocupa, el señor LEONEL LIZCANO DIAZ, es un asociado de nuestra cooperativa, y el hecho que este nos endose el título valor, no le resta importancia y tampoco validez, como tampoco ese acto de endosar se convierte en un acto mercantil ni se viola ninguna disposición normativa como lo señala el señor Rubio, quien realiza una mala interpretación de la norma con la finalidad de no cancelar la obligación que tiene para con nosotros, interponiendo acciones de tutela, derechos de petición y quejas ante entidad de vigilancia como la superintendencia, tratando de hacer incurrir en error a la administración de justicia, quien obra en derecho y nos concede la aplicación de la medida cautelar sobre la asignación de retiro del quejoso.

2. Se haga una investigación plena y concisa a que haya lugar, para esclarecer los hechos a que llevaron a esta cooperativa a violar las normas establecidas para tal fin, recurriendo a maniobras engañosas y poniendo en peligro la misma justicia de Colombia,

# Cooperativa Especializada en Gestión Judicial

## Recuperación de Cartera Boper



aprovechándose de las medidas prerrogativas que tienen las cooperativas, advirtiendo que no es la primera vez que lo hacen; por que actúan de forma irregular para presionar y hacer que les paguen oportunamente con antelación para el señor LEONEL DIAZ LIZCANO, acreedor de la letra de cambio, especialmente con personas pensionadas, como es el caso mío.

Es una manifestación totalmente falsa, injuriosa, calumniosa y temeraria, nosotros como cooperativa respetemos todas las normas existentes en el campo del cooperativismo en Colombia, nos ceñimos a los lineamientos legales como la implementación del SARLAFT, las 40 recomendaciones de la GAFI, y todos aquellos lineamientos que nos imponga una obligación.

El quejoso habla en su escrito, como si el caso de él no fuese el único, cuando en realidad esta es la primera queja que recibimos por parte de un deudor, el quejoso nunca nos ha dirigido una petición directamente, sino que llena de peticiones al despacho judicial, y ahora a la superintendencia con el único fin de evadir su responsabilidad, como el si lo ha hecho en otros casos, por el hecho de ostentar una asignación de retiro de la Policía Nacional. **No se porque el quejoso no le informa a la supersolidaria sobre la decisión tomada por un juez de la republica que administrando justicia y utilizando los medios legales, normativos, jurisprudenciales y doctrinales haciendo efectiva la supremacía de la ley, toma una decisión en derecho la cual hay que acatarla y si no se está de acuerdo se deben utilizar los canales correspondientes para que declaren la inexecutable de las normas aplicadas.**

El señor LEONEL DIAZ LIZCANO es asociado de la Cooperativa y esta es una realidad que no atenta contra ninguna normativa.

3. Se imponga una multa o sanción ejemplar en contra de esta cooperativa, en caso que salga responsables de estos hechos; lo cual ataca mi tranquilidad, mi vida digna y al derecho del mínimo vital, porque sin duda la cooperativa a través de su apoderado tenían claramente que soy pensionado, porque siempre lo hice saber a través de los dos (02) derechos de petición que fueron enviados al juzgado 1 promiscuo municipal y de la contestación de la demanda que se hizo en el mes de abril del presente año.

No podemos ser objeto de sanción o multa alguna por cuanto nuestro actuar se encuentra dentro del marco del artículo 10 de la ley 079 de 1998 en concordancia con la sentencia 589 de 1995.

# Cooperativa Especializada en Gestión Judicial

## Recuperación de Cartera Boper



La ley debe ejecutarse conforme a su contenido y no a los caprichos de los particulares que haciendo una mal interpretación de la misma pretenden evadir su responsabilidad.

Si el apoderado de COESGERECABOPER tenia o no conocimiento de la calidad que ostentaba el quejoso al momento de interponer la demanda, es un hecho irrelevante, por cuanto, todo proceso ejecutivo debe llevar unas medidas cautelares para satisfacer las obligación que se pretende hacer valer por medio de este proceso judicial, sin que esto implique la violación de derechos fundamentales de los deudores que se quieren pasar de astutos, invocando derechos, pero negando obligaciones.

4. Solicito con todo respecto me sea reconocida la indemnización a que haya lugar frente a estos hechos que se están presentando, poniendo en riesgo mi tranquilidad, mi buen nombre, el estado psicológico en que me tienen, y la acción ilegal que están adelantando y sobre todo pasando por encima 9 de la Ley constitucional como se manifiesta en la Ley 100 artículo 134 numeral 5, y las demás sentencias mencionadas en el presente escrito, lo cual refleja el actuar de esta cooperativa, que lo hace manera conocedora de la ley y de las normas, llevadas a cabo por el representante GERMAN BOHORQUEZ ORTEGA

El incidente de perjuicios se inicia cuando el demandante es vencido en estrados judiciales, pero en el caso que nos ocupa el quejoso fue el vencido; Por orden judicial emitida por el juez de conocimiento, el quejoso debe cancelar la totalidad de la obligación junto con sus intereses, gastos y costas judiciales, por ende, no es procedente a la cancelación y/o reconocimiento de ninguna indemnización por parte de nuestra cooperativa.

La tranquilidad, el buen nombre y el estado psicológico del quejoso no se hubiesen alterado si él cumpliera con sus obligación dinerarias, y no pretender hacer incurrir en error a su entidad solicitando iniciar investigación y/o sancionar o multar a nuestra cooperativa, la cual se encuentra actuando dentro del marco legal, avalada por las normas y la jurisprudencia Colombiana de las Altas Cortes.

Realizo la aclaración que el quejoso no puede solicitar la aplicación de la ley 100 de 1993, ya que este pertenece a un régimen especial como lo es la fuerza pública, la cual está regulada por el **Decreto 4433 de 2004 (vigente)** fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, además en su articulado **no hace alusión**

# Cooperativa Especializada en Gestión Judicial

## Recuperación de Cartera Boper



a excepciones en tema de inembargabilidad y descuentos (negrilla fuera de texto).

5. Sea investigado (proceso disciplinario) o lo pertinente en contra del señor abogado GERMAN BOHORQUEZ ORTEGA, por querer pasar por encima de la ley, haciendo cometer errores administrativos a los servidores públicos"

Esta petición es total irrelevantes, ya que el quejoso se jacta de ser conocedor de la ley, el mismo debe interponer las acciones disciplinarias contra el apoderado y demostrar las verdaderas faltas en que esta incurriendo el mismo, y no simplemente pedir a la superintendencia que se exceda en sus funciones y realice una actuación fuera de su campo de aplicación.

La petición es exagerada, temeraria e infundada, ya que el señor Rubio fue vencido en los estrados judiciales y en represaría solicita la investigación disciplinaria del abogado, por ganarle el pleito que el lleva mas de 6 meses tratando de hacer terminar el proceso que lo obliga a responder por sus obligaciones dinerarias, y que el juez amparado en el art. 7 del Código General del Proceso, la Constitución Nacional, normas legales, la Jurisprudencia y la doctrina actuó en derecho, dando la razón al togado.

El único que pretende en hacer incurrir en error a un Juez de la Republica es el señor Rubio, quien, con memoriales, derechos de petición, acción de tutela y queja ante su entidad, tergiversa la realidad de los hechos, para evadir su responsabilidad.

Para terminar, me permito informar a los señores de la superintendencia que, conforme a nuestros estatutos de constitución, en el TÍTULO II.- OBJETO DEL ACUERDO COOPERATIVO, ACTIVIDADES, CONVENIOS, Artículo 6º.- nuestro OBJETO DEL ACUERDO COOPERATIVO Y ACTIVIDADES, es:

nuestro objetivo como cooperativa es poner en práctica los principios de solidaridad, cooperación, generación de empleo y ayuda mutua entre sus asociados para propender por su mejoramiento económico, ambiental y social.....

..... En desarrollo del presente acuerdo cooperativo "COESGERECABOPER" procurare satisfacer las diversas necesidades de sus asociados, especialmente, a través de la prestación de servicios eficientes de servicios de consultoría y asesoramiento jurídico, recuperación de cartera, las actividades de representación de los intereses de las partes, sea o no ante tribunales u otros

# Cooperativa Especializada en Gestión Judicial

## Recuperación de Cartera Boper



órganos judiciales, realizadas por abogados o bajo la supervisión de abogados: Asesoramiento y representación en procedimientos civiles.....

.....Para el cumplimiento de su objeto social "COESGERECABOPER" podrá desarrollar todas aquellas actividades y operaciones concordantes con el mismo. La cooperativa tendrá como objeto social la prestación de bienes y servicios de acuerdo con las siguientes secciones:

- a. SECCION ASISTENCIA LEGAL O JURIDICA.
- b. SECCION DE SERVICIOS DE RECUPERACION DE CARTERA JURÍDICA.
- c. SECCION DE SERVICIOS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION.

### A. SECCION DE SERVICIOS DE ASISTENCIAL LEGAL O JURÍDICA A SUS ASOCIADOS Y/O TERCEROS.

El servicio de asistencia legal o Jurídica desarrollan las siguientes labores específicas:

1. Fomentar fuentes de trabajo para los asociados en cada una de las ramas de su profesión, a fin de prestar los siguientes servidos a la comunidad.

1.1. Realización de procesos pre jurídicos y jurídicos a las personas naturales y jurídicas que requieran del servido, tales como;

Recaudo de Cartera:

- Establecimientos de comercio.
- Rentista capital.
- Instituciones educativas.
- Personas naturales.
- Personas jurídicas.

Ejecución de titules valores y ejecutivos:

- Acuerdos de voluntades.
- Contratos de transacción.
- Letra de Cambio.
- Pagares.
- Cheques.
- Facturas.
- Compraventas.
- Sentencias judiciales.
- Contratos de arrendamientos de vivienda y locales comerciales.
- Ejecución de contratos y promesas de compraventas en general.

1.2. Representación jurídica ante la Rama Judicial de las personas naturales y jurídicas que requieran del servicio, en procesos tales como:

- Procesos administrativos

# Cooperativa Especializada en Gestión Judicial

## Recuperación de Cartera Boper



- Procesos de familia
- Procesos Civiles
- Procesos disciplinarios

2.Celebrar con entidades convenios de prestación de servicios para ser desarrollados por parte de sus asociados.

### B. SECCION DE SERVICIOS DE RECUPERACION DE CARTERA PREJURIDICA Y JURIDICA A SUS ASOCIADOS Y/O TERCEROS.

El servido de SECCION SERVICIOS DE RECUPERACION DE CARTERA PREJURIDICA Y JURIDICA; desarrollará las siguientes labores específicas:

- Recuperación de cartera prejudica de personas naturales y/o jurídicas.
- Recuperación de cartera de personas naturales y/o jurídicas por la vía judicial.

### C.SECCION DE SERVICIOS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION

El servicio de MERCADEO Y COMERCIALIZACION desarrollará las siguientes labores específicas:

- Compra y venta de cartera jurídica y/o prejudica de personas naturales y/o jurídicas.
- Compra y venta de derechos litigiosos, contratos de transacción y acuerdo de voluntades para el cobro de títulos valores y ejecutivos.

PARAGRAFO: EXTENSIÓN DE SERVICIOS. “COESGERECABOPER, por regla general, prestará sus servicios de manera exclusiva a sus asociados, sin que ello impida prestar nuestros servidos a los particulares que por solidaridad y necesidad lo requieran.

Así las cosas, COESGERECABOPER a través de sus apoderados le ha dado cabal cumplimiento a lo consagrado en los estatutos de constitución y/o nuestro objeto social, sin violar ninguna norma como lo señala el quejoso. Si bien es cierto, COESGERECABOPER, adquirió la titularidad del título valor por la figura jurídica denominada “endoso en propiedad”, lo que nos lleva a ejercer la acción cambiaria como legitimados en la causa activa en el presente proceso, con todos los derechos y obligacion subyacentes de este negocio jurídico.

Téngase presente que en Colombia no existe legislación alguna que regule el endoso en propiedad, pero si hay una amplia legislación respecto de la cesión de derechos que es el derecho incorporado en el título valor cuando el endosante nos endosa el título valor en propiedad, lo que en realidad está haciendo es cediéndonos todos los derechos y obligaciones que puede conllevar la ejecución del título valor.

# Cooperativa Especializada en Gestión Judicial

## Recuperación de Cartera Boper

---



Teniendo en cuenta que su despacho, trae a colación una circular de la superintendencia donde se exige el certificado de afiliación del deudor, pero para este caso se aplica es el **10 de la ley 079 de 1998 en concordancia con la sentencia 589 de 1995** normas que avalan el decreto de las medidas cautelares, igualmente me permito manifestar que dicha circular mencionada por el quejoso es un acto administrativo sin fuerza de ley y que va en contravía con la Constitución Nacional Colombiana, en su art. 230 señala:

—**Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.** La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. (resaltado fuera de texto).

Con lo anterior, se deduce que las leyes que regulan el endoso y/o contrato de cesión priman sobre los actos administrativos emitidos por la superintendencia, a esto se llama “primacía de la ley o imperio de la ley”.

La unidad del sistema jurídico, y su coherencia y armonía, dependen de la característica de ordenamiento de tipo jerárquico de que se reviste. La jerarquía de las normas hace que aquellas de rango superior, con la Carta Fundamental a la cabeza, sean la fuente de validez de las que les siguen en dicha escala jerárquica. Las de inferior categoría, deben resultar acordes con las superiores, y desarrollarlas en sus posibles aplicaciones de grado más particular. En esto consiste la connotación de sistema de que se reviste el ordenamiento, que garantiza su coherencia interna. La finalidad de esta armonía explícitamente buscada, no es otra que la de establecer un orden que permita regular conforme a un mismo sistema axiológico, las distintas situaciones de hecho llamadas a ser normadas por el ordenamiento jurídico.<sup>1</sup>

Aunado a esto, dentro de nuestra legislación comercial, tenemos la denominada “la ley de circulación en los Títulos Valores” que se traduce en el transferir los derechos incorporados en él o legitimar al tercero adquirente para el cobro de los derechos contenidos.

---

<sup>1</sup> Sentencia C-037/00

# **Cooperativa Especializada en Gestión Judicial**

## **Recuperación de Cartera Boper**

---



La Ley de circulación de los títulos valores nominativos es: el endoso y la entrega. Es tenedor legítimo del título valor nominativo, quien lo recibió por endoso y entrega y aparece inscrito en el registro del creador.

Seguidamente en Colombia los órganos de cierre, como son llamadas la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se han pronunciado respecto del endoso en propiedad y la cesión de derechos litigiosos, incorporados en los títulos valores ejecutados por COESGERECABOPER ante su despacho:

a. JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN, Magistrado ponente, STL5259-2021, Radicación n.º 92871, Acta n.º 16, Bogotá, D. C., cinco (05) de mayo de dos mil veintiuno (2021).

-El endoso es un acto unilateral, accesorio e incondicional por medio del cual el tenedor de un título valor mediante la firma impuesta en el documento como expresión de su consentimiento, trasfiere total o parcialmente su derecho y facultades a otra persona - art. 651, 654, 656 C. de Cio -. En el primer evento, es ejemplo el endoso en propiedad y del segundo el en procuración o al cobro y el en garantía. Al respecto ha de recordarse que el endoso en propiedad no requiere formula sacramental, bastando para ello la firma del endosante sin que se exija, para ese momento, el nombre del endosatario en tanto que esta clase de transferencia puede realizarse de manera completa o incompleta, solo que si únicamente aparece la firma del endosante, al endosatario le corresponde, para legitimarse cuando exija la prestación, completarlo con su nombre o el de un tercero que lo va a hacer efectivo - art. 654 ibídem - y, desde luego que la cadena de endosos sea ininterrumpida -art. 661 ib-.

Tampoco amerita discusión que para que el endoso produzca efectos cambiarios debe (i) tener la firma del endosante - arts.654 y 655 del Estatuto Mercantil - en tanto toda obligación cambiaria deriva su eficacia de la firma puesta en el título valor - art. 625 C.Cio-; (ii) constar en el título mismo o en hoja adherida a éste en la medida que por razón de la literalidad propia de esta clase de documentos, todo aspecto fundamental



# **Cooperativa Especializada en Gestión Judicial**

## **Recuperación de Cartera Boper**

---



o accesorio debe aparecer en ellos – art.626 ib -; (iii) y debe realizarse antes del vencimiento, de lo contrario produce los efectos de cesión ordinaria – art.660 ib-.

A su vez, en materia de defensa y en aplicación del principio de autonomía que caracteriza a las obligaciones cambiarias contenidas en los títulos valores, en principio las vicisitudes de los negocios que les dan origen no le son oponibles al demandante que no ha sido parte en aquellos o que sea tenedor de buena fe exenta de culpa, a menos que sea acreditada mala fe del ejecutante, carga de acreditación que compete a quien la enrostra debido a que esta no se presume, como sí lo es la buena fe. De tal manera que ese proceder ilegítimo de un sujeto, dado su carácter subjetivo, debe surgir de manera irrefragable del examen que el juez realiza a los medios probatorios que obran en el expediente, analizados uno a uno y en conjunto conforme a las reglas de la sana crítica – arts. 83 CN; 619, 627, 657, 784.12 C. de Cio; 769 C.C; 164, 167 y 176 CGP -.

b. La Sentencia 00527 de 2019 Consejo de Estado: SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C, Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS, Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil diecinueve (2019), Radicación número: 25000-23-26-000-2007-0052701(46791), Actor: PATRICIA LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARIA TERESA RODRÍGUEZ DE LÓPEZ, PEDRO CASTRO PÉREZ Y FROILAN NIEVES OLARTE.

Adjunto con esta respuesta decisión tomada por un Juez de la república de Colombia en el caso que nos ocupa, certificado de existencia y representación legal de la Cooperativa y sentencia 589.

Atentamente,

**JONATHAN SALVADOR PEREZ FLOREZ**

C.C. 1090374499 DE CÚCUTA

JUNTA DE VIGILANCIA

COESGERECABOPER

**JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE  
PAIME CUNDINAMARCA**

Paime Cundinamarca, cinco (5) de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024)

Expediente: 2024 - 00008  
Ejecutante: COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN GESTIÓN JUDICIAL Y  
RECUPERACIÓN DE CARTERA BOPER “COESGERECABOPER”  
Ejecutado: FERNANDO RUBIO RICO.

**EJECUTIVO SINGULAR DE MÍNIMA CUANTÍA.**

---

Mediante el memorial que antecede, el extremo pasivo, actuando en causa propia, presenta, como derecho de petición, una solicitud para obtener la terminación del proceso y el levantamiento de la medida cautelar que está afectando su pensión con la devolución de los dineros que se le han descontado con motivo del embargo.

Para ello se hacen las siguientes,

**CONSIDERACIONES:**

En el caso que se examina mediante auto del quince de febrero de 2024, conforme a la petición presentada por la parte actora, se ordenó el embargo y retención del 25% de la mesada pensional que devenga el demandado **Fernando Rubio Rico** como pensionado de la **Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional “CASUR”** acorde a lo previsto en los artículos 156 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo en armonía con el canon 4 de la Ley 11 de 1984, medida que fue comunicada a su destinatario mediante el oficio nro.134 de marzo 04 de 2024, encontrándose a la fecha vigente.

En efecto, el artículo 134 de la Ley 100 de 1993 numeral 5°, establece la inembargabilidad de las pensiones y demás prestaciones reconocidas por la ley, excepto que se trate de embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas. En el mismo sentido el artículo 344 del Código Sustantivo del Trabajo consagró que son inembargables las prestaciones sociales, cualquiera que sea su cuantía, excepto los créditos a favor de las cooperativas legalmente autorizadas y los provenientes de las pensiones alimenticias a que se refieren los artículos 411 y concordantes del Código Civil, pero el monto del embargo o retención no puede exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor de la prestación respectiva.

En la petición presentada por el ejecutado, se tiene que luego de hacer énfasis en la naturaleza jurídica de las cooperativas y tomando como referencia algunas decisiones de rango constitucional sobre la inembargabilidad de las pensiones, además de los descuentos que por embargo son los máximos permitidos para las mesadas pensionales, junto con el contenido de una circular externa emanada de la Superintendencia Financiera, centró sus argumentos en que por no tener la calidad de afiliado a la cooperativa **“COESGERECABOPER”** ni haber contratado directamente con ella el servicio financiero para préstamo de dinero es improcedente el privilegio legal que tiene la cooperativa para embargar su asignación de retiro.

Para este operador judicial, como se dijo en la sentencia anticipada, decisión que se encuentra ejecutoriada, no existe discusión que la letra de cambio, documento que es base de la ejecución, con fecha de creación 17 de septiembre de 2021, fue suscrita originalmente por el demandado en favor de un tercero por la suma de \$12.000.000,00 y que aquella se transfirió mediante endoso en propiedad por su acreedor -el tercero- a la cooperativa demandante, luego, por fuerza, resultan innecesarias las pruebas que reclama en su escrito el ejecutado para acreditar que al momento de la suscripción del título valor no era afiliado ni socio de **COESGERECABOPER** o que primigeniamente no fue emitida en favor de la entidad demandante.

El problema jurídico, entonces, se concentrará en examinar si la asignación mensual de retiro del señor **Rubio Rico** puede ser embargada bajo el privilegio excepcional que concede la ley a las obligaciones adquiridas en favor de las cooperativas, esto es, tratándose de una asignación mensual de retiro o pensión en un porcentaje de hasta un cincuenta por ciento (50%) o si, por no tener la calidad de afiliado o que la deuda no tuvo su origen directo en un convenio entre cooperativa y deudor procede el levantamiento de la medida cautelar por inembargabilidad y en consecuencia la devolución de los dineros que se encuentran depositados a órdenes de este proceso por concepto de embargo.

Frente a este problema la Corte Constitucional en sentencia C-589 de 1995 mediante la que se declararon exequibles las expresiones demandadas de los artículos 3., 4., y 10. de la Ley 79 de 1988, y del artículo 156 del C. Sustantivo del Trabajo, sostuvo lo siguiente:

*"(...) La evolución del concepto "ausencia de ánimo de lucro". Como toda institución que surge del proceso de interacción social, las cooperativas han evolucionado en sus principios y formas propias de organización, adecuando sus conceptos básicos a las exigencias de un mundo que se caracteriza por la celeridad en los cambios de orden político, económico, social, técnico y tecnológico; si bien en su origen ellas fueron estrechamente relacionadas con determinados modelos ideológicos, especialmente con el socialismo, han demostrado una especial capacidad para adaptarse a otros, siendo reivindicadas actualmente en todo el mundo, como importantes y útiles instrumentos para contrarrestar la concentración de la propiedad, regular el mercado y redistribuir los recursos, por lo que han merecido el reconocimiento y protección constitucional en un significativo número de Estados.*

*Ello explica por qué su característica esencial, que en los inicios del sistema se entendía necesaria en todas y cada una de sus actuaciones, y excluyente de cualquier otra posibilidad, referida a la ausencia total del animus lucrandi en el desarrollo de sus actividades, actualmente persista pero bajo presupuestos más flexibles, que se han ido adecuando a las necesidades que se desprenden de su condición, también esencial, de empresa.*

*"(...)"*

*En el caso colombiano, el concepto de ausencia de ánimo de lucro se mantiene explícito en la normativa que rige el sistema cooperativo, que lo consagra de manera expresa en la legislación básica contenida en la ley 79 de 1988; sin embargo, él*

*mismo no es radical y excluyente, pues si bien hace parte de las definiciones de "acuerdo cooperativo" y de cooperativa, artículos 3 y 4 demandados parcialmente por el actor, ello no puede entenderse como una restricción, que impida a las organizaciones cooperativas realizar actos mercantiles como se señaló anteriormente, los cuales se realizan dentro del marco señalado por la Carta Política, ya que de otra forma no podrían funcionar adecuadamente, al margen de los fines que cumplen como empresas que si bien tienen objetos propios necesitan realizar actos civiles y mercantiles para participar en la vida económica, jurídica y social.*

*Se reitera pues, que el legislador no les ha vedado la posibilidad de ejecutar actos mercantiles, necesarios en la dinámica de cualquier empresa moderna, y mucho menos que tal restricción se origine en el ordenamiento superior, en el cual no existe disposición alguna que así lo prevea.*

*Las cooperativas, como personas jurídicas de derecho privado, realizan, en cumplimiento de su objeto social, multiplicidad de actos jurídicos; sin embargo, no todos esos actos pueden calificarse como actos cooperativos, pues ellos están definidos expresamente en el artículo 7 de la Ley 79 de 1988:*

**"artículo 7°** Serán actos cooperativos los realizados entre sí por las cooperativas, o entre éstas y sus propios asociados, en desarrollo de su objeto social."

*Otros actos los realiza la cooperativa con terceros no afiliados en cumplimiento de su objeto social; en ambos casos pueden producirse, como de hecho se producen, actos comerciales, sin que con ello se desvirtúe o contraríe el objeto social de dichas empresas, o se vulnere disposición superior alguna. Así lo establece el artículo 10 de la Ley 79 de 1988:*

**"Artículo 10** Las cooperativas prestarán preferencialmente sus servicios al personal asociado. Sin embargo, de acuerdo con sus estatutos, podrán extenderlos al público no afiliado, siempre en razón del interés social o del bienestar colectivo. En tales casos, los excedentes que se obtengan serán llevados a un fondo social no susceptible de repartición."

*El destino que señala la norma citada para los excedentes obtenidos por el desarrollo de operaciones con terceros no afiliados, las cuales pueden ser de naturaleza mercantil, desde ningún punto de vista puede considerarse contrario a las disposiciones del ordenamiento superior, pues tal previsión se ajusta en todo al objeto esencial de las cooperativas, en tanto organizaciones solidarias que propenden por el interés de sus asociados.*

*Así, tal como lo señalan los intervinientes, en concordancia con la naturaleza misma del sistema cooperativo, nuestra legislación establece las actividades que se deben financiar con los excedentes que produce una organización cooperativa, cuya obtención no constituye per-se un objetivo esencial y prioritario; por eso, cuando en el artículo 54 de la citada Ley 79 de 1988, se establece de manera taxativa que ellos deben aplicarse, a alimentar e incrementar las reservas de protección a los aportes, las cuales no pueden ser distribuidas ni siquiera en caso de disolución de la cooperativa; a los fondos de educación y solidaridad; a reconocer intereses a los aportes de los asociados siempre que éstos sean bajos y limitados; y a asignar beneficios cooperativos a los asociados, no en proporción a sus aportes, sino al uso que ellos hayan hecho de los servicios de la entidad, el legislador lo que hizo fue*

*reafirmar la caracterización de este tipo de empresas, en las que prima el interés colectivo.*

*En lo que hace a la acusación que presenta el demandante contra la disposición del artículo 156 del C.S. del T., que viabiliza el embargo hasta del 50% del salario de un trabajador, en favor de cooperativas legalmente autorizadas, baste con decir que ella es concordante con los mandatos consignados en los artículos 58 y 333 de la C.P., que señalan para este tipo de empresas un tratamiento preferencial que las promocióne y proteja.*

*Así, las expresiones impugnadas por el demandante, contenidas en los artículos 3, 4 y 10 de la Ley 79 de 1988, y en el artículo 156 de la Ley 141 de 1961 C. S. del T., normas expedidas con anterioridad a la promulgación de la Constitución vigente, no sólo se ajustan al nuevo ordenamiento superior, sino que corresponden a la intención expresa del Constituyente de 1991, que consideró necesario promover, fortalecer y proteger las organizaciones de economía solidaria, dada su importancia y eficacia para el logro de los propósitos de una sociedad más justa, solidaria y equitativa, entre las que se encuentran, ocupando un lugar de preeminencia por su tradición y contribución al desarrollo del país, las cooperativas.”*

De esta manera la Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de la Ley 79 de 1988, en relación con los artículos demandados, lo mismo frente al artículo 156 del C.S.T., para advertir que las cooperativas pueden, porque no existe restricción legal, ejecutar no solo actos jurídicos cooperados sino también mercantiles y que para cualquiera de ellos procede la aplicación del privilegio de excepción de inembargabilidad.

Pues bien, al examinar el certificado de existencia y representación legal de la demandante, **COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN GESTION JUDICIAL Y RECUPERACION DE CARTERA BOFER** se acredita que es una cooperativa legalmente autorizada vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria que desarrolla no solo actos cooperativos sino que como empresa puede ejecutar actos mercantiles con personas particulares que no tienen la calidad de cooperados, actividad que como lo enseña la sentencia de constitucionalidad es necesaria no solo para su participación en la vida económica, jurídica y social sino también para funcionar adecuadamente.

Así las cosas, en el asunto bajo estudio, es claro que a pesar de que la demandante se encuentra registrada como una entidad sin ánimo de lucro (ESAL) ello no impide que la cooperativa realice actos mercantiles o comerciales, como lo es adquirir un título valor a través de endoso en propiedad, y que siendo una cooperativa legalmente autorizada tenga los privilegios de excepción que enmarca el ordenamiento jurídico para asegurar la solución de la obligación que se le adeuda a través de la medida cautelar de embargo de una asignación mensual de retiro o pensión.

De conformidad con las anteriores consideraciones, no obstante las condiciones en que se emitió el título valor y luego se transmitió a la demandante, al ser la ejecutante una cooperativa legalmente autorizada con tratamiento legal preferencial resulta ajustado a derecho el embargo decretado en auto del quince

de febrero del año en curso, lo mismo que el porcentaje de retención de la mesada pensional, razones que llevan a negar las peticiones del demandado ya que no se cumplen las condiciones previstas por el legislador para obtener la terminación del proceso y el levantamiento de la medida cautelar junto con la devolución de los dineros retenidos.

Por lo expuesto, el juzgado,

**RESUELVE:**

**NEGAR** la solicitud que, mediante derecho de petición, hizo el demandado.

**NOTIFÍQUESE**

  
**LUIS ERNESTO MANRIQUE CEDIEL**

El auto anterior se notifica por estado electrónico nro. **040** del **06 de septiembre de 2024**.

La secretaría

Firmado Por:

Luis Ernesto Manrique Cediel

Juez Municipal

Juzgado Municipal

Juzgado 001 Promiscuo Municipal

Paime - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2fbd0bd1e3fad619d1378fbe5a57b65f6ddf9f3e13c73eb88b297eefe6e543d8**

Documento generado en 05/09/2024 11:32:22 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**

**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**  
Fecha expedición : 24/10/2024 - 19:2:4  
Recibo No. 11750259, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: UNST2B15A4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón Social: COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN GESTION JUDICIAL Y  
RECUPERACION DE CARTERA BOPER  
Sigla: COESGERECABOPER  
Nit: 901723923-4  
Domicilio principal: Bucaramanga

**INSCRIPCIÓN**

Inscripción 05-515611-21  
Fecha de inscripción: 15 de Junio de 2023  
Ultimo año renovado: 2024  
Fecha de renovación: 23 de Enero de 2024  
Grupo NIIF: GRUPO III. MICROEMPRESAS

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Calle 42 # 9 - 16  
Municipio: Bucaramanga - Santander  
Correo electrónico: Gerentelegal@coesgerecaboper.com  
Teléfono comercial 1: 3133931734  
Teléfono comercial 2: No reportó  
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle 42 # 9 - 16  
Municipio: Bucaramanga - Santander  
Correo electrónico de notificación: coboper@hotmail.com  
Teléfono para notificación 1: 3133931734  
Teléfono para notificación 2: No reportó  
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN GESTION JUDICIAL Y RECUPERACION DE CARTERA BOPER  
SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



Cámara de Comercio de Bucaramanga  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**  
Fecha expedición : 24/10/2024 - 19:2:4  
Recibo No. 11750259, Valor: \$7.900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: UNST2B15A4**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**CONSTITUCIÓN**

Por Acta constitución y adopción de estatutos del 03 de Junio de 2023 de Asamblea General De Asociados de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de Junio de 2023, con el No 11080 del libro III, se constituyó la persona jurídica del sector solidario de naturaleza ESAL denominada COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN GESTION JUDICIAL Y RECUPERACION DE CARTERA BOPER Sigla: COESGERECABOPER

**ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Que la entidad se encuentra sometida a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia De Economía Solidaria. En consecuencia esta obligada a cumplir con las normas que rigen esta clase de entidades.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La entidad no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

**OBJETO SOCIAL**

La COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN GESTION JUDICIAL Y RECUPERACION DE CARTERA BOPER, tiene como objetivo fundamental poner en práctica los principios de solidaridad, cooperación, generación de empleo y ayuda mutua entre sus asociados para propender por su mejoramiento económico, ambiental y social, siempre orientada a contribuir a la satisfacción de las necesidades de sus asociados y de su núcleo familiar, basándose en el esfuerzo propio y la asistencia solidaria, a través de la contratación de los servicios profesionales de cada uno de los asociados que produzca bienes y servicios de manera eficiente a la comunidad en general. En desarrollo del presente acuerdo cooperativo COESGERECABOPER procurare satisfacer las diversas necesidades de sus asociados, especialmente, a través de la prestación de servicios eficientes de servicios de consultoría y asesoramiento jurídico, recuperación de cartera, las actividades de representación de los intereses de las partes, sea o no ante tribunales u otros órganos judiciales, realizadas por abogados o bajo la supervisión de abogados: Asesoramiento y representación en procedimientos civiles. Para el cumplimiento de su objeto social COESGERECABOPER podrá desarrollar todas aquellas actividades y operaciones concordantes con el mismo. La cooperativa tendrá como objeto social la prestación de bienes y servicios de acuerdo con las siguientes secciones: a. SECCION ASISTENCIA LEGAL O JURIDICA. b. SECCION DE SERVICIOS DE RECUPERACION DE CARTERA JURÍDICA. c. SECCION DE SERVICIOS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION. A. SECCION DE SERVICIOS DE



Cámara de Comercio de Bucaramanga  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**  
Fecha expedición : 24/10/2024 - 19:2:4  
Recibo No. 11750259, Valor: \$7.900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: UNST2B15A4**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

ASISTENCIAL LEGAL O JURÍDICA A SUS ASOCIADOS Y/O TERCEROS. El servicio de asistencia legal o Jurídica desarrollan las siguientes labores específicas: 1. Fomentar fuentes de trabajo para los asociados en cada una de las ramas de su profesión, a fin de prestar los siguientes servicios a la comunidad. 1.1. Realización de procesos pre jurídicos y jurídicos a las personas naturales y jurídicas que requieran del servido, tales como: Recaudo de Cartera: -Establecimientos de comercio. -Rentista capital. -Instituciones educativas. -Personas naturales. -Personas jurídicas. Ejecución de títulos valores y ejecutivos: -Acuerdos de voluntades. -Contratos de transacción. -Letra de Cambio. -Pagares. -Cheques. -Facturas. -Compraventas. -Sentencias judiciales. -Contratos de arrendamientos de vivienda y locales comerciales. -Ejecución de contratos y promesas de compraventas en general. 1.2. Representación jurídica ante la Rama Judicial de las personas naturales y jurídicas que requieran del servicio, en procesos tales como: -Procesos administrativos. -Procesos de familia. -Procesos Civiles. -Procesos disciplinarios. 2. Celebrar con entidades convenios de prestación de servicios para ser desarrollados por parte de sus asociados. B. SECCION DE SERVICIOS DE RECUPERACION DE CARTERA PREJURIDICA Y JURIDICA A SUS ASOCIADOS Y/O TERCEROS. El servido de SECCION SERVICIOS DE RECUPERACION DE CARTERA PREJURIDICA Y JURIDICA; desarrollará las siguientes labores específicas: -Recuperación de cartera prejuridica de personas naturales y/o jurídicas. -Recuperación de cartera de personas naturales y/o jurídicas por la vía judicial. C. SECCION DE SERVICIOS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION. El servicio de MERCADEO Y COMERCIALIZACION desarrollará las siguientes labores específicas: Compra y venta de cartera jurídica y/o prejuridica de personas naturales y/o jurídicas. Compra y venta de derechos litigiosos, contratos de transacción y acuerdo de voluntades para el cobro de títulos valores y ejecutivos. PARAGRAFO: EXTENSIÓN DE SERVICIOS. COESGERECABOPER, por regla general, prestará sus servicios de manera exclusiva a sus asociados, sin que ello impida prestar nuestros servicios a los particulares que por solidaridad y necesidad lo requieran.

**PATRIMONIO**

\$30.000.000

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La Cooperativa tendrá un gerente con su correspondiente suplente. El Gerente será el representante legal de la Cooperativa ejecutor de los acuerdos y decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración, nombrado por este organismo.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

PARAGRAFO 1. Sus funciones o atribuciones deberán ser ejercidas bajo la

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**  
Fecha expedición : 24/10/2024 - 19:2:4  
Recibo No. 11750259, Valor: \$7.900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: UNST2B15A4**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

inmediata dirección del Consejo de Administración y responderá ante la asamblea y el Consejo de Administración, y estas son: 1. Ejecutar las decisiones, acuerdos y orientaciones de la Asamblea General y del Consejo de Administración, así como supervisar el funcionamiento de la Cooperativa y la prestación de los servicios, el desarrollo de los programas y oportuna ejecución de las operaciones y su contabilización. 2. Proponer las políticas administrativas de la Cooperativa, los programas de desarrollo y preparar los proyectos y presupuestos que serán sometidos a consideración del Consejo de Administración. 3. Dirigir las relaciones públicas de la Cooperativa, en especial con las organizaciones del sector cooperativo y social en general. 4. Procurar que los asociados reciban información oportuna sobre los servicios y demás asuntos de interés y mantener permanente comunicación con ellos. 5. Ejecutar los planes, decisiones, acuerdos y orientaciones de la Asamblea General y del Consejo de Administración. 6. Planear, organizar, ejecutar y controlar las actividades operativas y de administración de la Cooperativa. 7. Dirigir en coordinación del presidente del Consejo de Administración las relaciones públicas de la entidad. 8. Proponer planes y programas para el desarrollo de la Cooperativa y preparar los proyectos del presupuesto que serán sometidos a consideración del Consejo de Administración. 9. implementar las políticas de Identificación del riesgo, Medición o evaluación, Control y Monitoreo. 10. Fijar las políticas, definir los mecanismos, instrumentos y los procedimientos que se aplicarán en la entidad y los demás elementos que integran el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT). 11. Ejercer, las siguientes funciones relacionadas con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT): a. Someter a aprobación del Consejo de Administración, en coordinación con el Oficial de Cumplimiento, el manual de procedimientos del SARLAFT y sus actualizaciones. b. Verificar que los procedimientos establecidos desarrollen las políticas aprobadas por el Consejo de Administración. c. Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT, según la aprobación impartida por el Consejo de Administración. d. Brindar el apoyo que requiera el Oficial de Cumplimiento. e. Coordinar y programar los planes de capacitación sobre el SARLAFT dirigido a todas las áreas y funcionarios de la Cooperativa, incluyendo el Consejo de Administración, la Revisoría Fiscal y la Junta de Vigilancia. f. Verificar la adopción y funcionamiento de los procedimientos definidos para el adecuado manejo, conservación y archivo de los documentos y reportes relacionados con el SARLAFT, y garantizar la confidencialidad de dicha información. 12. Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa y conferir poderes en juicios y mandatos especiales, así como recibir las resueltas de los procesos y recibir depósitos judiciales a su nombre.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta constitución y adopción de estatutos del 03 de Junio de 2023 de

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
Fecha expedición : 24/10/2024 - 19:2:4  
Recibo No. 11750259, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: UNST2B15A4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Asamblea General De Asociados inscrita en esta cámara de comercio el 15 de Junio de 2023 con el No 11080 del libro III, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	BOHORQUEZ ORTEGA GERMAN	C.C. 91488673

ORGANO DE ADMINISTRACIÓN

Por Acta constitución y adopción de estatutos del 03 de Junio de 2023 de Asamblea General De Asociados inscrita en esta camara de comercio el 15 de Junio de 2023 con el No 11080 del libro III, se designo a:

P R I N C I P A L E S

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PEREZ ORTEGA SALVADOR	C.C. No 13443364
FLOREZ MONTES LUZ ALEYDA	C.C. No 60305549
PEREZ FLOREZ JENIFFER MELISA	C.C. No 60446173

S U P L E N T E S

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
BOHORQUEZ ORTEGA MARINELA	C.C. No 63515906
BOHORQUEZ ORTEGA CARLOS ALBERTO	C.C. No 91283515

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**  
Fecha expedición : 24/10/2024 - 19:2:4  
Recibo No. 11750259, Valor: \$7.900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: UNST2B15A4**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 6910.  
Actividad secundaria Código CIIU: 8291.

**ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO**

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el (los) siguientes(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN GESTION JUDICIAL Y  
RECUPERACION DE CARTERA BOPER  
Matricula No: 650032  
Fecha de matrícula: 15 de Junio de 2023  
Último año renovado: 2024  
Categoría: Establecimiento de Comercio  
Dirección: CALLE 42 # 9-16 BARRIO GARCIA ROVIRA  
Municipio: Bucaramanga - Santander

Si desea obtener información detallada de los anteriores establecimientos de comercio o de aquellos matriculados en una jurisdicción diferente a la del propietario, deberá solicitar el certificado de matrícula mercantil del respectivo establecimiento de comercio.

La información correspondiente a los establecimientos de comercio, agencias y sucursales, que la persona jurídica tiene matriculados en otras cámaras de comercio del país, podrá consultarla en [www.rues.org.co](http://www.rues.org.co).

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es :  
Micro Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por Actividad Ordinaria: \$0

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:  
CIIU: 6910

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Cámara de Comercio de Bucaramanga  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
Fecha expedición : 24/10/2024 - 19:2:4  
Recibo No. 11750259, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: UNST2B15A4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

| El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, |  
| normas sanitarias y de seguridad. |

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la entidad, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a [www.camaradirecta.com](http://www.camaradirecta.com) opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.



Lina María Rodríguez Buitrago

**DERECHO DE PROPIEDAD-Límites en la función social**

*El derecho de propiedad se configura como un derecho subjetivo que tutela intereses individuales, derecho que encuentra los límites del poder conferido al titular para su ejercicio, en el cumplimiento, precisamente, de la función social que le corresponde; en consecuencia, esa función social no se debe entender como un mero límite externo para su ejercicio, sino como parte sustancial del mismo.*

**FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD**

*La función social de la propiedad presenta diversas y matizadas caracterizaciones, las cuales están determinadas por la naturaleza de los bienes, su clase, y la entidad que es titular de los derechos que de ella emanan, así como también por la posición económica de las personas que la poseen. "La función social tiene, por una parte, el significado de moderar y restringir el alcance del derecho de propiedad, mientras que por otra parte, le corresponde el de implicar una mayor afirmación de ciertas clases de propiedad.*

**COOPERATIVA-Concepto de ausencia de ánimo de lucro**

*Como toda institución que surge del proceso de interacción social, las cooperativas han evolucionado en sus principios y formas propias de organización, adecuando sus conceptos básicos a las exigencias de un mundo que se caracteriza por la celeridad en los cambios de orden político, económico, social, técnico y tecnológico; si bien en su origen ellas fueron estrechamente relacionadas con determinados modelos ideológicos, especialmente con el socialismo, han demostrado una especial capacidad para adaptarse a otros, siendo reivindicadas actualmente en todo el mundo, como importantes y útiles instrumentos para contrarrestar la concentración de la propiedad, regular el mercado y redistribuir los recursos, por lo que han merecido el reconocimiento y protección constitucional en un significativo número de Estados. Ello explica por qué su característica esencial, que en los inicios del sistema se entendía necesaria en todas y cada una de sus actuaciones, y excluyente de cualquier otra posibilidad, referida a la ausencia total del animus lucrandi en el desarrollo de sus actividades, actualmente persista pero bajo presupuestos más flexibles, que se han ido adecuando a las necesidades que se desprenden de su condición, también esencial, de empresa.*

**COOPERATIVA-Realizan actos cooperativos y comerciales**

*Las cooperativas, como personas jurídicas de derecho privado, realizan, en cumplimiento de su objeto social, multiplicidad de actos jurídicos; sin embargo, no todos esos actos pueden calificarse como actos cooperativos.*

**COOPERATIVA-Embargos**

*En lo que hace a la acusación que presenta el demandante contra la disposición del artículo 156 del C.S. del T., que viabiliza el embargo hasta del 50% del salario de un trabajador, en favor de cooperativas legalmente autorizadas, baste con decir que ella es concordante con los mandatos consignados en los artículos 58 y 333 de la C.P., que señalan para este tipo de empresas un tratamiento preferencial que las promocióne y proteja.*

## **COOPERATIVA-Protección constitucional**

*Las expresiones impugnadas, normas expedidas con anterioridad a la promulgación de la Constitución vigente, no sólo se ajustan al nuevo ordenamiento superior, sino que corresponden a la intención expresa del Constituyente de 1991, que consideró necesario promover, fortalecer y proteger las organizaciones de economía solidaria, dada su importancia y eficacia para el logro de los propósitos de una sociedad más justa, solidaria y equitativa, entre las que se encuentran, ocupando un lugar de preeminencia por su tradición y contribución al desarrollo del país, las cooperativas.*

### **Ref.: Expediente No. D-962**

Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 3, 4 y 10 (todos parcialmente) de la Ley 79 de 1988, Por la cual se actualiza la legislación cooperativa y contra el artículo 156 (parcial) de la Ley 141 de 1961, Por la cual se adoptaron como legislación permanente los Decretos 2663 y 3743 de 1950, Código Sustantivo del Trabajo.

#### **Actor:**

**José Luis Pabón Apicella**

#### **Magistrado Ponente:**

**Dr. FABIO MORON DIAZ**

Santafé de Bogotá, D.C., Diciembre siete (7) de mil novecientos noventa y cinco (1995)

## **I. ANTECEDENTES**

El ciudadano **JOSE LUIS PABON APICELLA**, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad que establece el artículo 242 de la Constitución Nacional, presentó ante la Corte Constitucional la demanda de la referencia

contra los artículos 3, 4 y 10 (todos parcialmente) de la Ley 79 de 1988, por la cual se actualiza la legislación cooperativa, y contra el artículo 156 (parcial) de la Ley 141 de 1961, por la cual se adoptaron como legislación permanente los Decretos 2663 y 3743 de 1950, Código Sustantivo del Trabajo.

Admitida la demanda se ordenó practicar las comunicaciones de rigor constitucional y legal; se fijó en lista el negocio por la Secretaría General de la Corte y simultáneamente se dió traslado al Despacho del Señor Procurador General de la Nación, quien rindió el concepto de su competencia.

Una vez cumplidos todos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Nacional y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda presentada.

## **II. EL TEXTO DE LA DEMANDA**

A continuación se transcriben los artículos 3, 4 y 10 de la Ley 79 de 1988, y el artículo 156 de la Ley 141 de 1961, Código Sustantivo del Trabajo, advirtiendo que se subrayan las expresiones acusadas.

### **"LEY 79 DE 1988**

"Por la cual se actualiza la legislación cooperativa"

El Congreso de Colombia

DECRETA  
TITULO I  
DEL ACUERDO COOPERATIVO

CAPITULO I  
DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 3o.** Es acuerdo cooperativo el contrato que se celebra por un número determinado de personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado denominada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro.

Toda actividad económica, social o cultural puede organizarse con base en el acuerdo cooperativo.

**Artículo 4o.** Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o



servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.

Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando cumpla los siguientes requisitos:

1. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, del remanente patrimonial.

2. Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real."

**Artículo 10o.** Las cooperativas prestarán preferencialmente sus servicios al personal asociado. Sin embargo, de acuerdo con sus estatutos podrán extenderlos al público no afiliado, siempre en razón del interés social o del bienestar colectivo. En tales casos, los excedentes que se obtengan serán llevados a un fondo social no susceptible de repartición.

## **LEY 141 DE 1961**

### **CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO**

"Por la cual se adoptan como legislación permanente los Decretos 2663 y 3743 de 1950"

El Congreso de Colombia

DECRETA

### **CAPITULO IV EMBARGO DE SALARIOS**

**Artículo 156.** EXCEPCION A FAVOR DE COOPERATIVAS Y PENSIONES ALIMENTICIAS. Todo salario puede ser embargado hasta en un cincuenta por ciento (50%) en favor de cooperativas legalmente autorizadas, o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con los artículos 411 y concordantes del Código Civil."

## **III. LA DEMANDA**

### **A. Normas constitucionales que se consideran infringidas**

El demandante considera que las disposiciones acusadas vulneran los artículos 2 y 13 de la Constitución Nacional.

## **B. Los Fundamentos de la Demanda**

En opinión del demandante las expresiones acusadas de los artículos 3, 4 y 10 de la Ley 79 de 1988, "Por la cual se actualiza la legislación cooperativa", y del artículo 156 de la Ley 141 de 1961, Código Sustantivo del Trabajo, vulneran y son contrarias a los principios de vigencia de un orden justo y de igualdad ante la ley que consagran los artículos 2 y 13 de la Constitución Nacional.

Manifiesta el actor que las normas demandadas, al definir las cooperativas como personas jurídicas sin ánimo de lucro, cuyas actividades deben estar orientadas a satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general, están desconociendo la "realidad material" de dichas entidades, que como cualquier empresa requieren, para crecer y fortalecerse, del lucro que se genere de sus actividades y transacciones, entendiendo por lucro el "beneficio o provecho que se obtiene de algo". Lo contrario, señala, sería tanto como imponerles el trabajar a pérdida, dejando en entredicho el desarrollo mismo del sistema cooperativo.

Ese lucro, que requieren las cooperativas para fortalecerse y ampliarse, puede obtenerse, en opinión del demandante, de los "excedentes" que se originen en actividades y transacciones que se desarrollen con terceros no asociados, teniendo en cuenta que, precisamente, el artículo 10 de la Ley 79 de 1988, autorizó a las cooperativas a "extender sus servicios" al público no afiliado, sin que por ello se desvirtúe el objetivo que les es propio de propender por el beneficio colectivo y el interés social y público.

Distingue el demandante, con fundamento en el artículo 7 de la Ley 79 de 1988, entre el "acto cooperativo", que se realiza entre cooperativas o entre éstas y sus asociados, y el "acto mercantil", que surge de las relaciones entre la cooperativa y un no afiliado; éste último, señala, debe estar regulado por el Código de Comercio, artículos 20, 21 y 22 y debe someterse a sus disposiciones, pues ellos están "...investidos verdaderamente de ánimo lucrativo y mercantilista..." y no corresponden en sus características a los principios y doctrinas que rigen el sistema cooperativo.

Con base en esta distinción, el actor encuentra injustificada e inconstitucional la disposición del artículo 10 de la ley 79 de 1988, que se refiere a que los excedentes obtenidos en las cooperativas, por el desarrollo de actividades o transacciones con personas no afiliadas, con terceros, deben ser llevados a un fondo social no susceptible de repartición, pues, reitera, los mismos se originan en transacciones del "más puro corte mercantilista" y en ellos subyace un claro ánimo de lucro y especulación; reclama entonces para esos excedentes, que sostiene, son en estricto sentido lucro, la aplicación del principio de participación en las utilidades obtenidas, por tratarse de actos mercantiles que como tales deben someterse a la normatividad del Código de Comercio, pues de lo contrario se incurriría en la violación al principio de igualdad ante la ley que consagra el artículo 13 de la C.P.

Con base en lo expresado por esta Corporación, en el sentido de que "...la ausencia de ánimo de lucro se predica de las personas que son miembros de una asociación o corporación, pero no de esta en sí misma considerada...", (Sentencia C-051 de febrero de 1995, M.P. Dr. Jorge Arango Mejía), el actor afirma que la ausencia de ánimo de lucro a que se refieren los artículos 3 y 4 de la ley 79 de 1988, normas que contienen las expresiones demandadas, solo "...podría predicarse de los cooperados o socios de la cooperativa, más no de los actos resultantes de la extensión al público no afiliado de los "servicios" de la cooperativa, en desarrollo de su objeto social, que, señala, constituirían actos no cooperativos, en su criterio, actos mercantiles.

Enfatiza el actor el presunto desconocimiento que las normas impugnadas hacen de la "realidad material", anotando que cuando ello ocurre "se entronizan desigualdades, privilegios y discriminaciones irrazonables", que conducen a quebrantar el principio de igualdad ante la ley a que se refiere el artículo 13 de la Carta; destaca en este punto pronunciamientos de la Corte Constitucional en el sentido de que la aplicación de un tratamiento jurídico diferente a situaciones materialmente semejantes, sólo se justifica cuando es indispensable para mantener condiciones de igualdad básica de oportunidades, de lo contrario genera el reconocimiento de un privilegio y la consecuente discriminación.

Por último, también cuestiona algunas expresiones del artículo 156 de C.S.del T., por considerar, que al igual que aquellas acusadas de la ley 79 de 1988, su contenido vulnera el principio de igualdad ante la ley, pues al viabilizar la posibilidad de embargo a favor de las cooperativas legalmente establecidas, hasta del 50% del salario de un trabajador, sin distinguir si las obligaciones provienen de un "acto cooperativo" o de un "acto mercantil", está autorizando, en lo que se refiere a estos últimos, la aplicación de un tratamiento discriminatorio para los comerciantes, lo cuales no pueden solicitar embargos por sumas superiores a la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo legal mensual del trabajador.

#### **IV. EL CONCEPTO DEL FISCAL**

En la oportunidad correspondiente el Señor Procurador General de la Nación (E), rindió el concepto de su competencia, solicitando a esta Corporación que se declaren exequibles las expresiones acusadas, puesto que las mismas no contrarían ningún precepto constitucional.

Señala el Ministerio Público que el actor parte de un supuesto equivocado, al considerar que por ser la cooperativa una empresa, ella tiene ánimo de lucro.

En el concepto fiscal se analiza el término empresa, que se utiliza en la definición legal de cooperativa, anotando que él mismo se refiere a una asociación de personas, que no necesariamente siempre se organizan en el marco del esquema capitalista, caracterizado por el ánimo de lucro, sino que pueden recurrir y optar por otros varios modelos de organización, entre ellos los que

propenden por la realización de actividades de servicio, bien sean públicos o privados, en los que no hay tal ánimo de lucro, uno de ellos la cooperativa.

En su criterio, desde una perspectiva estrictamente jurídica, las cooperativas son asociaciones antes que sociedades, lo que se comprueba en la misma definición legal, la cual alude a los asociados y no a los socios.

Se refiere el Procurador a los orígenes del cooperativismo, sistema que se concibió como una respuesta a la inequitativa distribución de la riqueza propia del sistema capitalista; por ello, afirma, la organización cooperativa tiene como objetivos primordiales facilitar la participación de los asociados en la toma de decisiones y efectuar la repartición equitativa los beneficios; remitiéndose a un concepto doctrinario el Ministerio Público manifiesta que "...la cooperativa es una unión de personas económicamente débiles que suavizan la rudeza de las relaciones económicas por hábitos de ayuda mutua y de solidaridad, pero que al mismo tiempo ponen en juego el esfuerzo y la responsabilidad personal", siempre bajo el supuesto de la ausencia entre sus objetivos del ánimo de lucro. Destaca como esencial a las organizaciones cooperativas el concepto de solidaridad, el cual, anota, consigna la Carta Política en su artículo 1 como principio fundante del Estado Colombiano.

La solidaridad, dice, es elemento esencial para diferenciar entre las sociedades comerciales "...que tienen por finalidad la obtención de utilidades ilimitadas con respecto al aporte individual de capitales..." y las empresas cooperativas "...que funcionan para servir y no para ganar."

Rechaza el Procurador la afirmación del actor, en el sentido de que a ciertos actos de las cooperativas les deben ser aplicables las normas del Código de Comercio; si bien, dice, las cooperativas son empresas y como tales deben ser autosuficientes, esto es, deben reportar beneficios como resultado de su gestión que garanticen su propia existencia, dichos beneficios, que en ellas constituyen "excedentes", a diferencia de lo que es propio de una sociedad mercantil, no se distribuyen como utilidades entre los socios de manera proporcional a sus aportes, sino que van a alimentar un fondo especial cuyos recursos única y exclusivamente pueden destinarse a ciertas actividades: incrementar las reservas legales obligatorias, conformar fondos de solidaridad y educación, y reconocer y asignar los llamados beneficios cooperativos a sus asociados, en proporción al uso que éstos hayan hecho de los servicios de la entidad.

Argumenta que el capital no es ajeno al sistema cooperativo, sin embargo, señala, él cumple una función diferente a la que cumple en la empresa mercantil: en la primera se constituye en instrumento para alcanzar propósitos de bienestar común, lo que justifica que sus excedentes no deban ser repartidos entre los asociados, mientras que en la segunda, siendo lucro, éste se erige como la principal finalidad. De ahí la diferencia en la base normativa que regula una y otra actividad.

También destaca el concepto fiscal el tratamiento preferencial que el constituyente de 1991 quiso otorgar a las distintas formas de economía solidaria,

una de ellas la cooperativa, al considerarlas "...alternativas eficaces para satisfacer necesidades colectivas apremiantes mediante una distribución democrática de los excedentes que excluye el afán indiscriminado de lucro...", esta concepción se aprecia en el texto de los artículos 58, 60 y 333 del ordenamiento superior. En este contexto, las expresiones acusadas del artículo 156 del C. S. del T. no repugnan, en concepto del Procurador, ningún precepto constitucional, al contrario materializan el tratamiento preferencial que les otorga la Carta.

Anota el Ministerio Público, que teniendo en cuenta que es característica fundamental de las cooperativas que ellas sean "obra de los usuarios para los usuarios", de acuerdo con la ley, la prestación de sus servicios a terceros no cooperados es de carácter excepcional; ello se corrobora, dice, en el hecho de que sólo sea permitida en el supuesto de que se presenten determinadas situaciones: por razones económicas temporales o permanentes; por razones de técnica profesional; como incentivo para atraer nuevos asociados, o por razones de interés social o bienestar colectivo.

Concluye su concepto el Procurador, manifestado su desacuerdo con la tesis propuesta por el demandante, en el sentido de que los actos comerciales no cooperativos, deben regirse por las normas del Código de Comercio, ello por cuanto "...no es viable aplicarle el **estatuto subjetivo** de los comerciantes a estas entidades en razón a que el Código de Comercio considera que para adquirir la calidad de comerciante se requiere poseer **ánimo de lucro**, del cual carecen las cooperativas, sin desconocerse que en (sic) aplicación del criterio objetivo que predomina en el Código de Comercio el acto mercantil de la cooperativa deba regirse por dicha legislación, sin consideración al sujeto que lo realiza."

## **V. OTRAS INTERVENCIONES**

### **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS**

Dentro de la oportunidad correspondiente, se hizo presente la abogada **AIDY LUCIA MEDINA CORDERO**, quien como apoderada y representante del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, manifestó su intención de defender la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas, para lo cual presentó a consideración de esta Corporación los siguientes argumentos:

En primer lugar, la interviniente consideró pertinente distinguir el acto comercial del acto cooperativo; el primero, señala, además de caracterizarse por estar referido a conductas reiteradas del comerciante que constituyen su medio normal de vida, está regido por el Código de Comercio como norma especial y sólo en aquello que dicho estatuto no regule de manera específica, le serán aplicables las normas supletorias contenidas en el Código Civil.

Para referirse al segundo, al acto cooperativo, la interviniente se remite a la doctrina: "...el acto cooperativo es el supuesto jurídico, ausente de lucro y de

intermediación, que realiza la organización cooperativa en cumplimiento de un fin preponderantemente económico y de utilidad social."

"El acto cooperativo se constituirá en 'fuente' de la relación jurídica cooperativa, tiene un evidente contenido subjetivo, ya que exige en todos los casos la concurrencia de la cooperativa como uno de sus sujetos, pudiendo el otro sujeto ser otra cooperativa o un asociado, e incluso un tercero no asociado, pero en todos los casos el acto estará dirigido al cumplimiento del objeto social de la cooperativa, el bienestar de la comunidad y la consecución de sus fines institucionales."<sup>1</sup>

Destaca como el sistema cooperativo está ligado de manera estrecha a la búsqueda del bienestar de la comunidad, principio que subyace en el texto de las normas que definen el objeto y características del mismo, contenidas en la Ley 79 de 1988, especialmente en sus artículos 2, 3 y 4. Así, anota, en el artículo 3 de manera explícita se consigna como principio esencial de las cooperativas, la ausencia de ánimo de lucro en las actividades que éstas cumplan, en las que debe prevalecer como objetivo principal el interés social.

Se refiere al concepto de empresa aclarando que este admite diferentes formas organizativas: empresa capitalista, pública o cooperativa, todas ellas, anota, deben ser autosuficientes, "...pues no se trata de vender los bienes o servicios por debajo del costo...", la distinción se ubica en la connotación que en unas y otras dan a la diferencia entre el costo de un bien o un servicio y el precio de venta del mismo; en la empresa capitalista dicha diferencia constituye lucro, entendido como ganancia, provecho o utilidad, mientras en la empresa cooperativa esa diferencia constituye el excedente, que precisamente se caracteriza por no ser objeto de distribución entre los asociados, en proporción a sus aportes, y por estar su destinación predeterminada en la misma ley, que como lo señalaba también el Ministerio Público, establece de manera expresa las actividades que se pueden financiar con ellos, medida con la que se garantiza el cumplimiento del objetivo esencial del sistema: el beneficio social.

Afirma la interviniente que la estructura de las cooperativas es "por naturaleza" democrática, ello implica que los excedentes que se obtengan del ejercicio de sus actividades repercutan en beneficio de todos, y que su distribución, cuando ella se da, se haga en proporción no de los aportes individuales sino de la utilización que el asociado haya hecho de sus servicios; en la organización cooperativa, todos los asociados tienen los mismos derechos sin importar la cantidad de capital aportado a la sociedad.

En su opinión, la definición esencial de las cooperativas, como organizaciones cuyo objetivo central es contribuir al bienestar de sus asociados y al bienestar general, se reafirmó cuando el legislador las autorizó a extender sus servicios a terceros no afiliados, pues con ello reiteró su condición de instrumento regulador del mercado y de los precios. La filosofía del contrato cooperativo, agrega la

---

<sup>1</sup>La interviniente cita a Corbella, Carlos Jorge, Los actos Cooperativos. Apuntes para un Estudio Metodológico. Intercoop, Editora Cooperativa Ltda.,1985, Buenos Aires, Argentina.

interviniente, está consagrada en la ley, por lo que la definición de sus actos ha de encontrarse en la intención que los origina; así, se puede afirmar que ella genera excedentes y no lucro, en cuanto lo que persigue es el beneficio de todos y cada uno de los asociados sin distinguirlos por la cuantía de sus aportes, y no la obtención de una ganancia o una remuneración para su capital.

No encuentra la interviniente en la normativa que rige el sistema cooperativo, y específicamente en las disposiciones acusadas por el demandante, ningún elemento que contraría los preceptos constitucionales que aquel considera vulnerados; al contrario, manifiesta que pretender que las cooperativas limiten sus operaciones a aquellas que realiza con sus asociados, implicaría coartar su libertad de participar en una economía de mercado como la que opera en Colombia, generando un tratamiento discriminatorio para las mismas, que se traduciría en un claro desconocimiento del principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 13 de la Carta.

Resalta además, que una restricción de ese tipo colocaría a la organizaciones de economía solidaria, especialmente a las cooperativas, en condiciones de desventaja e inferioridad frente a otro tipo de empresas, entre ellas y principalmente las mercantiles, la cuales resultarían privilegiadas al poder acceder con plena libertad a la totalidad del mercado, contando para ello con un capital significativamente más grande, concentrado en unas pocas manos y con mayor capacidad de operación, circunstancias que facilitarían el logro de su único y esencial objetivo: el lucro.

Por último, rechaza también la acusación de inconstitucionalidad que el actor hace a algunas expresiones del artículo 156 del C.S. del T., las cuales, dice, "...hacen una excepción a la norma general de los embargos salariales, en favor de un sector económico que no representa más del 7% del producto interno bruto (PIB) y está constituido por organizaciones que buscan la protección de sectores sociales desprotegidos por el Estado."

## **VI. IMPUGNACIONES**

### **CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA**

La doctora **SANDRA HELENA GODOY SARRIA**, obrando en nombre y representación de la Confederación de Cooperativas de Colombia, presentó dentro del término establecido, escrito en cual solicita a esta Corporación no acceder a las pretensiones del demandante, por considerar que las expresiones acusadas se ajustan al ordenamiento constitucional.

Fundamenta su solicitud en los siguientes argumentos:

El cooperativismo, dice, surge en el siglo XIX como una respuesta alternativa, que propende por la búsqueda de un orden justo, democrático y solidario, a las consecuencias que se derivaron de la revolución industrial, especialmente a aquellas referidas a la primacía del capital sobre el trabajo, las cuales, junto con

el principio de competencia, contribuyen a que en el mercado sólo permanezcan los más fuertes.

Esa respuesta alternativa, se fundamenta en un modelo en el que subyace como principio fundamental la idea de una economía de servicio y no de lucro, en la que los intereses de trabajo están por encima de los intereses del capital, por lo que se elimina del sistema el propósito o ánimo de lucro.

Considera que uno de los principios fundamentales del cooperativismo moderno, es el de "reembolso de excedentes a los miembros", de conformidad con el cual, de presentarse dichos excedentes como resultado de las operaciones propias de la organización, éstos se distribuirán entre los asociados, de una forma tal que "precluya la posibilidad de que un miembro obtenga ventajas a expensas de los demás..."; esos mecanismos de distribución están consignados en la misma ley, sin que por ello se desvirtúe la filosofía que distingue las cooperativas de otro tipo de empresas.

El ánimo de lucro, enfatiza la apoderada de la Confederación, es un elemento subjetivo que caracteriza la actividad de los comerciantes, esto es, de aquellas personas naturales o jurídicas que se dedican profesionalmente a su ejercicio, el cual está regido por las disposiciones del Código de Comercio. Dicho elemento es ajeno por completo a las empresas cooperativas, sin que ello quiera decir que éstas no puedan cumplir una actividad económica, la cual de hecho cumplen; la diferencia con las empresas comerciales radica en que éstas dirigen sus esfuerzos de manera exclusiva a obtener ganancias que luego se distribuirán en proporción a los aportes, mientras que en las cooperativas la formación de excedentes no es esencial, "...la cooperativa es una organización que a través de la solución del problema económico del miembro brinda a éste educación y formación."

En su opinión, no es aceptable la acusación del actor a las disposiciones que impugna, por cuanto ellas no contrarían en ningún aspecto lo dispuesto en el artículo 13 de la C.P.. Manifiesta que "...no se observa cómo la no aplicación de las normas comerciales al patrimonio de una cooperativa, pueda infringir la norma aludida de la Constitución, si se tiene en cuenta que dichas entidades tienen su régimen propio y especial, regulado por la ley 79 de 1988, distinto del régimen de las sociedades comerciales en las cuales el propósito es lograr utilidades para ser repartidas entre los socios."

Resalta la apoderada de la Confederación, la indiscutible pertinencia de aplicar, frente a supuestos distintos, una normatividad diferente; así, señala, no se puede equiparar la categoría de las personas jurídicas denominadas cooperativas a la categoría de los comerciantes; cada una de ellas corresponde a un supuesto diferente para el cual existe una normatividad específica; en el caso de las cooperativas, la contenida en la ley 79 de 1988. En su opinión, tal argumento desvirtúa cualquier contradicción entre las normas acusadas y el artículo 2 de la Carta, pues la aplicación de un tratamiento diferente para una categoría especial, no vulnera sino que reafirma el presupuesto esencial del Estado de mantener un orden justo.



Por último, destaca el tratamiento preferencial que la Carta otorga a las organizaciones de economía solidaria, artículos 58, 60 y 333, el cual, anota, justifica plenamente lo dispuesto en el artículo 156 del C. S. del T., norma cuyo contenido aunque anterior a la Constitución de 1991, está acorde con el propósito del Constituyente de impulsar y fomentar este tipo de organizaciones.

## **VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE**

### **Primera.- La competencia y objeto de control**

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución Nacional, la Corte Constitucional es competente para conocer las acusaciones planteadas contra los artículos 3, 4, y 10 (todos parcialmente), de la Ley 79 de 1988, y contra el artículo 156 (parcial) de la Ley 141 de 1961 C.S. del T., por tratarse de disposiciones que hacen parte de leyes de la República.

### **Segunda.- La materia de la demanda**

El sistema cooperativo desde sus orígenes en la *Rochdale Society of Equivale Pioneers*, constituida en 1844 en Inglaterra, se apoya en un principio esencial, que define su propia naturaleza y que hoy se acepta universalmente: la realización de su objeto social prescindiendo del ánimo de lucro. Dicho principio lo adoptó la legislación colombiana y actualmente se encuentra consagrado en la Ley 79 de 1988, "Por la cual se actualiza la legislación cooperativa", norma que en su artículo 4 define este tipo de organización de la siguiente manera:

"Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general."

Al analizar la demanda presentada por el actor, en cuyo texto se impugna de manera reiterada la expresión "sin ánimo de lucro", en principio pareciera que éste rechazara de plano el reconocimiento que hace la ley de este tipo de empresas, por considerar inconstitucional dicha característica, que como ya se ha dicho es esencial a tales organizaciones; sin embargo, del análisis de las peticiones y de los argumentos que las sustentan, se concluye que la solicitud del demandante se dirige, no a controvertir la característica que singulariza la actividad de las cooperativas, ausencia de ánimo de lucro, sino el tratamiento que se da a los actos que éstas realizan, los cuales en su opinión se deben distinguir, según los sujetos que participen en ellos, entre actos cooperativos y actos mercantiles, debiendo éstos últimos someterse a la legislación comercial.

Sobre dichos aspectos se pronunciará esta Corporación.

En concepto del actor es innegable que las cooperativas desarrollan actos mercantiles, necesarios para su propia existencia como empresas privadas, las cuales requieren de la generación de lucro para garantizar su funcionamiento y permanencia; dichos actos, en tanto actos mercantiles, señala el demandante, deben estar excluidos de los condicionamientos y restricciones a los que están sometidos aquellos actos que si reúnen las condiciones necesarias para ser calificados como actos cooperativos. En consecuencia, reclama para los que califica actos mercantiles, la aplicación de la legislación comercial vigente, pues considera que al someterlos a la legislación cooperativa se están contrariando los principios de vigencia de un orden justo y de igualdad ante la ley, consagrados en los artículo 2 y 13 de la Carta.

### **Tercera.- Las empresas de economía solidaria en el Estado Social de Derecho.**

La actividad económica que caracteriza las sociedades contemporáneas, no puede circunscribirse a los límites de un determinado y rígido esquema, dada la pluralidad de formas de empresa que en ella coexisten, para las cuales es necesario el diseño y aplicación de tratamientos y sistemas regulativos heterogéneos; así lo reconoce cualquier Estado Social de Derecho, sin que Colombia sea una excepción.

Nuestra Constitución Política reconoce esa pluralidad de formas de organización estructural de las empresas, que se constituyen, desarrollan y coexisten en un contexto de economía de mercado y libre competencia, en el cual la propiedad cumple una función social que implica obligaciones. Así lo consagra expresamente el artículo 58 de la Carta:

"Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social."

"La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica."

"....."

En nuestro ordenamiento jurídico el derecho de propiedad se configura como un derecho subjetivo que tutela intereses individuales, derecho que encuentra los límites del poder conferido al titular para su ejercicio, en el cumplimiento, precisamente, de la función social que le corresponde; en consecuencia, esa función social no se debe entender como un mero límite externo para su ejercicio, sino como parte sustancial del mismo. Sobre el particular ha dicho esta Corporación:

"Un cometido específico del Estado Social de Derecho, consiste en hacer realidad la función social de la propiedad, con su inherente función ecológica, y de la empresa, protegiendo, fortaleciendo y promoviendo las formas asociativas y solidarias de propiedad (arts. 58, inciso 3o. y 333, inciso 3o. de la C.P), en las cuales, la base de la unión asociativa no la constituyen únicamente los aportes de capital con fines exclusivamente especulativos o de utilidad, sino primordialmente el trabajo personal y el esfuerzo conjunto, todo ello encaminado a lograr unos propósitos de interés común, que se reflejan en la mejora de las condiciones económicas de sus miembros, mediante la distribución equitativa y democrática de los excedentes económicos y en la satisfacción de urgentes y apremiantes necesidades colectivas de los asociados, en lo familiar, social y cultural." (Sentencia C-37/94. M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).

La función social de la propiedad presenta diversas y matizadas caracterizaciones, las cuales están determinadas por la naturaleza de los bienes, su clase, y la entidad que es titular de los derechos que de ella emanan, así como también por la posición económica de las personas que la poseen. "La función social tiene, por una parte, el significado de moderar y restringir el alcance del derecho de propiedad, mientras que por otra parte, le corresponde el de implicar una mayor afirmación de ciertas clases de propiedad." <sup>2</sup>

En Colombia el Constituyente de 1991, en el ya citado artículo 58 de la C.N., no sólo concedió un carácter especial y preferencial a las distintas formas de economía solidaria, al consagrar que "El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad", sino que atribuyó a los poderes públicos una responsabilidad específica para el efecto. Sobre el particular ha dicho esta Corporación:

**"Propiedad asociativa y solidaria.** La Carta de 1991 consagra, ...la garantía de nuevas formas de propiedad: la propiedad colectiva y solidaria.

"Así, el artículo 58 señala de manera imperativa que el Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

"En el mismo sentido se manifiesta la Carta en su artículo 60, al establecer como principio rector de la actividad pública que el Estado "promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad". Se trata, pues, de un mandato constitucional al legislador para que adopte las medidas que considere oportunas en desarrollo de esta norma fundamental.

---

<sup>2</sup> Roca Baixauli, Joaquín, Interpretaciones de la función Social de la Propiedad en... El Sistema Económico en la Constitución Española, Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, Ministerio de Justicia, Vol. I, Madrid 1994

"En su segundo inciso, al regular la privatización de las empresas del Estado, el mismo artículo señala que se debe ofrecer a los trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a la propiedad accionaria.

"En consonancia con el artículo anterior, el 64 establece la obligación del Estado de promover el acceso progresivo, en forma individual o asociativa a la propiedad de la tierra y de prestar ciertos servicios públicos a los trabajadores del campo.

"También el artículo 333, inciso tercero, consagra como obligación imperativa del Estado, fortalecer las organizaciones solidarias y estimular el desarrollo empresarial.

"No cabe duda entonces que fue voluntad del Constituyente la de garantizar de manera especial estos tipos de propiedad, tal como se desprende de las normas arriba señaladas.

"De otra parte, una lectura de los antecedentes constitucionales de tales normas demuestra también la especial preocupación del constituyente por la protección y estímulo de la propiedad asociativa y solidaria. Así, por ejemplo, en el informe-ponencia para primer debate en plenaria, sobre régimen económico se lee:

*'EMPRESA PRIVADA, SOLIDARIA Y ESTATAL*

*Las formas de economía solidaria son consideradas no solo como una eficaz alternativa para satisfacer necesidades colectivas apremiantes mediante una distribución democrática de los excedentes, que excluye el afán indiscriminado de lucro, sino también, lo que no es menos valioso, como una pedagogía contra los excesos del individualismo.*

*'Por esa razón, desde hace varios años las más variadas iniciativas han propuesto otorgar garantías constitucionales a las formas de propiedad y economía solidaria.*

*'Estas propuestas encontraron amplia resonancia no sólo en sectores comprometidos tradicionalmente con el movimiento cooperativo sino también en otros, como el de los indígenas, cuya presencia en la vida política ha sido vista con especial complacencia, como quiera que constituye el carácter pluricultural y pluriétnico de la Nación colombiana y valioso aporte en el enriquecimiento de nuestro ordenamiento jurídico. "Igualmente se ha sugerido que la solidaridad se constituya en elemento propio y característico de algunas formas de propiedad, lo cual, en verdad, no es nada distinto a reconocer la existencia de este fruto natural de su función social....*

*'En virtud de todo lo anterior, lo que ahora se busca, es pues, darle carta de ciudadanía en la nueva constitución, al menos en igualdad de*

*condiciones con otras formas de organización económica destinadas también a a satisfacer necesidades sociales.*

*'Más aún, varios proyectos proponen que el texto constitucional ordene que se promueva o estimule la propiedad o economía solidaria. La propuesta se fundamenta en que no basta con reconocer su igualdad formal, sino que necesita del apoyo estatal para superar la condición de debilidad en que, con frecuencia, concurre al mercado frente al vigoroso desarrollo de la empresa privada y estatal, en razón de que esta forma de organización ha sido objeto de discriminación y abandono por parte del Estado.'*

"La lectura de los antecedentes y de los respectivos textos constitucionales, evidencian que el constituyente consagró como una obligación especial de los poderes públicos fomentar, fortalecer y proteger estos tipos de propiedad. El legislador no puede entonces descindir la garantía especial que la Carta otorga a la propiedad solidaria y asociativa; tampoco puede la administración pasar por alto la prioridad en su fomento y protección. Igualmente, los jueces y especialmente la jurisdicción constitucional, encargada de velar por la integridad de la Carta deben en cumplimiento de sus funciones contribuir dentro de su órbita al logro de tales propósitos." (Corte Constitucional, Sentencia C-074, de febrero 25 de 1993, M.P, Dr. Ciro Angarita Barón).

Sobre estos presupuestos, la acusación del actor a las expresiones demandadas, en el sentido de que ellas desconocen el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 13 de la Carta, son infundadas, pues es precisamente la misma Constitución la que le señala al Estado la obligación de promover y proteger las formas asociativas y solidarias de propiedad, para lo cual el legislador debe introducir mecanismos que fortalezcan y estimulen la organización de este tipo de empresas, entre ellas las cooperativas, por cumplir éstas formas de propiedad una importante función social, en cuanto instrumentos reguladores del mercado y de los precios, que coadyuvan a la redistribución del ingreso en favor de los más débiles económicamente. El legislador de 1988 se anticipó en esta materia al constituyente de 1991, al entender la trascendencia y eficacia del sistema cooperativo, reconocidas universalmente, y se ajustó, contrario a lo que señala el demandante a la "realidad material", que exige formas alternativas y democráticas para el acceso y manejo de la propiedad.

Dichos mecanismos se traducen, obviamente, en tratamientos diferenciales, de preferencia y estímulo, que exigen una legislación especial, distinta de la aplicable a otro tipo de empresas, como por ejemplo a las de carácter comercial, por tratarse de supuestos y objetivos diferentes. Si bien las normas demandadas fueron expedidas con anterioridad a la promulgación de la Carta de 1991, ellas coinciden en su filosofía y disposiciones con los mandatos del ordenamiento superior vigente, al establecer un régimen especial para el sistema cooperativo, con miras a promocionarlo y protegerlo; así lo consagra el artículo 2 de la Ley 79 de 1988:

**"artículo 2o.** Declárese de interés común la promoción, la protección y el ejercicio del cooperativismo como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución de la propiedad y del ingreso, a la racionalización de todas las actividades económicas y a la regulación de tarifas, tasas, costos y precios, en favor de la comunidad y en especial de las clases populares.

"El Estado garantiza el libre desarrollo del cooperativismo, mediante el estímulo, la protección y la vigilancia, sin perjuicio de la autonomía de las organizaciones cooperativas."

Supone equivocadamente el actor, con base en un criterio restrictivo, que el legislador se encuentra impedido para definir bases normativas especiales y heterogéneas, que atiendan la pluralidad de formas de organización empresarial que se desarrollan en un contexto como el nuestro, en el que prevalece el principio de la libre competencia, por considerar que ello implicaría la violación al principio de igualdad ante la ley que supone el mismo trato a situaciones idénticas. Alude, para respaldar su posición, a las disposiciones de los artículos 20, 21, y 22 del Código de Comercio, normas que, señala, de manera expresa predeterminan cuáles son los actos mercantiles, estableciendo que su condición es independiente de quien los ejecuta; ello es así siempre que los actos en cuestión contengan la característica que les es esencial para ser actos mercantiles, aplicando el criterio objetivo que acoge el derecho colombiano para esta clase de actos, que pueden ser ejecutados por las cooperativas, sin que se advierta en qué puede radicar la razón que llevó al actor a reclamar un vicio de inconstitucionalidad en este caso. Es claro entonces que no tiene fundamento alguno, en el marco constitucional, el que las cooperativas, además de los actos que le son propios, no puedan ejecutar actos mercantiles.

#### **Cuarta.- La evolución del concepto "ausencia de ánimo de lucro".**

Como toda institución que surge del proceso de interacción social, las cooperativas han evolucionado en sus principios y formas propias de organización, adecuando sus conceptos básicos a las exigencias de un mundo que se caracteriza por la celeridad en los cambios de orden político, económico, social, técnico y tecnológico; si bien en su origen ellas fueron estrechamente relacionadas con determinados modelos ideológicos, especialmente con el socialismo, han demostrado una especial capacidad para adaptarse a otros, siendo reivindicadas actualmente en todo el mundo, como importantes y útiles instrumentos para contrarrestar la concentración de la propiedad, regular el mercado y redistribuir los recursos, por lo que han merecido el reconocimiento y protección constitucional en un significativo número de Estados.

Ello explica por qué su característica esencial, que en los inicios del sistema se entendía necesaria en todas y cada una de sus actuaciones, y excluyente de cualquier otra posibilidad, referida a la ausencia total del *animus lucrandi* en el

desarrollo de sus actividades, actualmente persista pero bajo presupuestos más flexibles, que se han ido adecuando a las necesidades que se desprenden de su condición, también esencial, de empresa.

En algunos países ese concepto básico, ausencia de ánimo de lucro, ha evolucionado de manera tal que en su acepción categórica y excluyente ha desaparecido de las correspondientes normativas; un caso ilustrativo es el de la legislación española, a la cual, vale la pena remitirse:

En 1942, partiendo de una posición radical y restrictiva ella establecía la ausencia de ánimo de lucro como la característica sustantiva y única que distinguía la sociedad cooperativa de la sociedad mercantil; en 1971, al expedir un nuevo reglamento, el legislador español introdujo una definición de lucro tendiente a distinguir entre actividades generadoras de excedentes que asumía admisibles en la actividad cooperativa, y actividades generadoras de lucro, entendidas como aquellas que suponen un beneficio exclusivo para la intermediación, que entendía no ajustadas al objeto propio de este tipo de entidades; con ello admitía para las cooperativas la obtención de beneficios que provinieran de cualquier actividad, siempre que ella no fuera de intermediación; esta restricción, sin embargo, fue superada por las prácticas propias de las cooperativas, que prestaban de manera cotidiana servicios de intermediación financiera y comercial, caracterizados por una base participativa que los singularizaba y distinguía de aquellos prestados por entidades comerciales. En 1974 la legislación española sobre cooperativas ya reconoce, sin restricciones, que la cooperativa es una empresa que puede proponerse cualquier actividad económico-social lícita.

Sobre ese presupuesto, en 1987, en desarrollo del mandato constitucional contenido en el artículo 129 de la Carta Española, que le señaló a los poderes públicos la obligación de fomentar mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas, se expidió una nueva normativa, que pretendió ajustarse a los nuevos presupuestos políticos y socio-económicos que en esa época enfrentaba ese país; en ella se potenció y favoreció el desarrollo de la actividad empresarial de las cooperativas, dando espacio para que se perfeccionaran los sistemas que estimulan el incremento de los recursos financieros propios, se fortalecieran las garantías de los terceros en sus relaciones económicas con las cooperativas, se ampliaran los mecanismos de control sobre la gestión y se abrieran, aún más, las posibilidades para determinadas clases de cooperativas, de realizar operaciones con terceros no asociados.

En el caso colombiano, el concepto de ausencia de ánimo de lucro se mantiene explícito en la normativa que rige el sistema cooperativo, que lo consagra de manera expresa en la legislación básica contenida en la ley 79 de 1988; sin embargo, él mismo no es radical y excluyente, pues si bien hace parte de las definiciones de "acuerdo cooperativo" y de cooperativa, artículos 3 y 4 demandados parcialmente por el actor, ello no puede entenderse como una restricción, que impida a las organizaciones cooperativas realizar actos mercantiles como se señaló anteriormente, los cuales se realizan dentro del

marco señalado por la Carta Política, ya que de otra forma no podrían funcionar adecuadamente, al margen de los fines que cumplen como empresas que si bien tienen objetos propios necesitan realizar actos civiles y mercantiles para participar en la vida económica, jurídica y social.

Se reitera pues, que el legislador no les ha vedado la posibilidad de ejecutar actos mercantiles, necesarios en la dinámica de cualquier empresa moderna, y mucho menos que tal restricción se origine en el ordenamiento superior, en el cual no existe disposición alguna que así lo prevea.

Las cooperativas, como personas jurídicas de derecho privado, realizan, en cumplimiento de su objeto social, multiplicidad de actos jurídicos; sin embargo, no todos esos actos pueden calificarse como actos cooperativos, pues ellos están definidos expresamente en el artículo 7 de la Ley 79 de 1988:

**"artículo 7o.-** Serán actos cooperativos los realizados entre sí por las cooperativas, o entre éstas y sus propios asociados, en desarrollo de su objeto social."

Otros actos los realiza la cooperativa con terceros no afiliados en cumplimiento de su objeto social; en ambos casos pueden producirse, como de hecho se producen, actos comerciales, sin que con ello se desvirtúe o contraríe el objeto social de dichas empresas, o se vulnere disposición superior alguna. Así lo establece el artículo 10 de la ley 79 de 1988:

**"Artículo 10.** Las cooperativas prestarán preferencialmente sus servicios al personal asociado. Sin embargo, de acuerdo con sus estatutos, podrán extenderlos al público no afiliado, siempre en razón del interés social o del bienestar colectivo. En tales casos, los excedentes que se obtengan serán llevados a un fondo social no susceptible de repartición."

El destino que señala la norma citada para los excedentes obtenidos por el desarrollo de operaciones con terceros no afiliados, las cuales pueden ser de naturaleza mercantil, desde ningún punto de vista puede considerarse contrario a las disposiciones del ordenamiento superior, pues tal previsión se ajusta en todo al objeto esencial de las cooperativas, en tanto organizaciones solidarias que propenden por el interés de sus asociados.

Así, tal como lo señalan los intervinientes, en concordancia con la naturaleza misma del sistema cooperativo, nuestra legislación establece las actividades que se deben financiar con los excedentes que produce una organización cooperativa, cuya obtención no constituye per-se un objetivo esencial y prioritario; por eso, cuando en el artículo 54 de la citada Ley 79 de 1988, se establece de manera taxativa que ellos deben aplicarse, a alimentar e incrementar las reservas de protección a los aportes, las cuales no pueden ser distribuidas ni siquiera en caso de disolución de la cooperativa; a los fondos de educación y solidaridad; a reconocer intereses a los aportes de los asociados siempre que éstos sean bajos y limitados; y a asignar beneficios cooperativos a



los asociados, no en proporción a sus aportes, sino al uso que ellos hayan hecho de los servicios de la entidad, el legislador lo que hizo fue reafirmar la caracterización de este tipo de empresas, en las que prima el interés colectivo.

En lo que hace a la acusación que presenta el demandante contra la disposición del artículo 156 del C.S. del T., que viabiliza el embargo hasta del 50% del salario de un trabajador, en favor de cooperativas legalmente autorizadas, baste con decir que ella es concordante con los mandatos consignados en los artículos 58 y 333 de la C.P., que señalan para este tipo de empresas un tratamiento preferencial que las promocióne y proteja.

Así, las expresiones impugnadas por el demandante, contenidas en los artículos 3, 4 y 10 de la Ley 79 de 1988, y en el artículo 156 de la Ley 141 de 1961 C. S. del T., normas expedidas con anterioridad a la promulgación de la Constitución vigente, no sólo se ajustan al nuevo ordenamiento superior, sino que corresponden a la intención expresa del Constituyente de 1991, que consideró necesario promover, fortalecer y proteger las organizaciones de economía solidaria, dada su importancia y eficacia para el logro de los propósitos de una sociedad más justa, solidaria y equitativa, entre las que se encuentran, ocupando un lugar de preeminencia por su tradición y contribución al desarrollo del país, las cooperativas.

Previas las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional, Sala Plena, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

### **RESUELVE:**

Declarar EXEQUIBLES las expresiones demandadas de los artículos 3., 4., y 10. de la Ley 79 de 1988, y del artículo 156 de la Ley 141 de 1961, C.S. del T.

Notifíquese, cópiese, comuníquese, e insértese en la gaceta de la Corte Constitucional.

**JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO**  
**Presidente**

**JORGE ARANGO MEJIA**  
**Magistrado**

**ANTONIO BARRERA CARBONELL**  
**Magistrado**

**EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ**  
**Magistrado**

**CARLOS GAVIRIA DIAZ**  
**Magistrado**

**HERNANDO HERRERA VERGARA**  
**Magistrado**

**ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO**  
**Magistrado**

**FABIO MORON DIAZ**  
**Magistrado**

**VLADIMIRO NARANJO MESA**  
**Magistrado**

**MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO**  
**Secretaria**